

Santiago, diez de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

Por sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT I-194-2023, se rechazó en todas sus partes la reclamación judicial de multa administrativa interpuesta, con costas.

Contra este fallo, la parte reclamante interpone recurso de nulidad invocando la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por estimar que se ha dictado sentencia con infracción sustancial de garantías o derechos constitucionales, en relación con la garantía del debido proceso.

En subsidio, invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por estimar que se ha dictado sentencia con infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con el artículo 503 del mismo cuerpo legal.

En subsidio, invoca la causal contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, aseverando que la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de las partes.

Considerando:

Primero: Que, en primer término, la reclamante invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, aseverando que, durante la audiencia única celebrada en la causa, la sentenciadora infringió lo dispuesto en los artículos 454 N° 4 y 454 N° 1, del Código del Trabajo, y, además, la garantía constitucional del debido proceso.

Al respecto, indica que, en la audiencia ya referida, en circunstancias que su parte incorporaba su prueba – documental, testimonial y otros medios de prueba (“Registro de Faena” en formato digital) – la sentenciadora alteró el orden de la rendición de la prueba, sin resolución alguna. Añade que excluyó prueba pertinente, sin causal ni fundamento. Además, consideró extemporáneo un recurso de reposición interpuesto en contra de la “resolución que estableció que la magistrada rechazaba la prueba”.



Afirma que, tras la declaración de un primer testigo, la jueza señora Andrea Soler, habiendo consultado a su parte si presentaría más testigos, a lo que contestó afirmativamente, “solamente para mostrar el registro de faena”, la magistrada habría manifestado que no revisaría ese documento. También, indica que previo al ingreso de la segunda testigo, habría manifestado que no revisaría “en línea esa plataforma”. Indica que, tras la declaración de la segunda testigo, la sentenciadora solicitó realizar observaciones a la prueba, a lo que su parte contestó que aun restaban sus “otros medios de prueba”.

Prosigue señalando que esas circunstancias, la magistrada reiteró que no tendría por incorporado “ese medio de prueba”, a lo que su parte respondió interponiendo un recurso de reposición “para efectos del recurso de nulidad”, el que fue considerado extemporáneo por la jueza, por no haber sido interpuesto al momento de resolver, de lo que discrepa el reclamante, pues la prueba aún no había sido ofrecida. Asevera que la jueza “interrumpió a la abogada y decidió resolver de plano, sin oír los argumentos, por ser supuestamente extemporáneo, pese a que aún no era la oportunidad procesal de rendir ‘otros medios de prueba’, tal como lo dispone el artículo 454 Nro. 1 del Código del Trabajo”.

Además, destaca que “la jueza no indicó que se modificaría el orden de rendición de la prueba, ni menos aún dio una razón fundada para ello; y tampoco esgrimió la causal de exclusión de la prueba de esta parte: simplemente se negó a revisar prueba absolutamente pertinente y que demostraba el error de hecho, como es el Registro de Faena, llevado de forma digital en la plataforma Check Digital.”

En consecuencia, considera que, “al impedir a su parte rendir prueba sobre la existencia del Registro de Faena, que era el mismo a la fecha de la fiscalización que al día de hoy, en concordancia con el testimonio del testigo que estuvo presente durante el transcurso de la fiscalización, se impidió a esta parte acreditar el único hecho a probar determinado por la magistrada de la instancia.”.

Aduce que lo reseñado constituye una grave infracción al debido proceso, mientras que el vicio alegado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues, considera, que, de haber rendido la prueba antes indicada, la sentenciadora habría acogido el reclamo, dejando sin efecto la



multa, por lo que solicita la nulidad del procedimiento, debiendo ordenar la realización de una nueva audiencia única de contestación, conciliación y prueba con arreglo a la ley y a las garantías constitucionales por un juez no inhabilitado, permitiendo a su parte rendir prueba absolutamente pertinente y que permite acreditar el hecho a probar.

Segundo: Que, en subsidio, invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, aseverando que se ha dictado sentencia con infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ello, en relación con el artículo 503 del mismo cuerpo legal.

Al respecto, expresa que el vicio se manifiesta en el considerando quinto de la sentencia. Aduce que, efectivamente el Código del Trabajo contempla dos mecanismos para dirigirse en contra de una resolución de multa impuesta por la Inspección del Trabajo, conforme sus artículos 503 y 511. Sin embargo, contrario a lo concluido por la sentenciadora, afirma que el Código del Trabajo no limita al sancionado a entablar una u otra, ni una previo a la siguiente. Expresa que la única limitación se encuentra en el artículo 54 de la Ley 19.880.

Adiciona que, si bien la ley establece el recurso de Reconsideración Administrativa en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, nada obsta a que se interponga un reclamo judicial directamente ante los Tribunales Laborales, pues en ninguna disposición se establece que sea un requisito de interposición del reclamo judicial de multa, que la multa haya sido previamente reconsiderada en sede administrativa. Complementa lo anterior destacando que existe la posibilidad de interponer la acción judicial directamente, pues el artículo 503 del Código del Trabajo lo habilita expresamente. A su vez, conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, postula que el reclamo judicial puede versar directamente sobre la multa o sobre la resolución que se pronuncia sobre la reconsideración de multa. Respecto al fundamento dado por la sentencia, en cuanto a que la petición principal y subsidiaria no podrían ser parte del reclamo judicial, por ser materia de un recurso de reconsideración administrativa, afirma que dicha interpretación infringe lo previsto en el artículo 503 del Código del Trabajo, pues se requieren a su parte “requisitos que no han sido señalados por la ley, como es el interponer una Reconsideración Administrativa previo a



interponer el reclamo judicial; y que dicha acción se limite a cualquier materia, excepto el error de hecho”.

Afirma que el vicio reseñado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues si el tribunal “se hubiese atendido al procedimiento de reclamo judicial, que rige el caso de autos, especialmente lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, habría concluido que no existió un yerro de esta parte al interponer la acción de reclamo judicial de multa, fundada en el error de hecho, por cuanto mi representada sí contaba con el Registro de Faena, como lo tiene por acreditado en el mismo considerando quinto”.

Como petición concreta de esta causal, consigna que “al incurrir la sentencia en la causal de nulidad del artículo 477, en relación al artículo 503, ambos del Código del Trabajo, hace que la misma deba ser anulada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago, por cuanto los vicios expuestos han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, debiendo dictar la correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley, es decir, acogiendo el reclamo judicial de multa interpuesto por esta parte y dejando sin efecto la Multa Nro. 7921/23/28-1.”

Tercero: Que, en subsidio, invoca la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, en relación con su artículo 456, aseverando que la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana critica.

Al respecto, aduce que el vicio de nulidad invocado se manifiesta en el considerando sexto de la sentencia, al tener por constatado que su parte exhibió el “Registro de Faena”, es decir, contaba con éste a la fecha de la fiscalización, pero concluye finalmente que no se da el error de hecho alegado.

Agrega que, en dicha fundamentación, el tribunal incurre en un error lógico al analizar la prueba, pues concluyó que “sí se mostró y exhibió el registro de faena – conforme a la declaración de los testigos contestes de esta parte – “ pero, aun así, descartó el error de hecho “al determinar que mi representada no contaba con el registro de faena”. Afirma que lo anterior constituye una infracción del principio lógico de la identidad.

Prosigue arguyendo que “la sentenciadora no puede concluir que no existe error de hecho, luego de establecer que ambos testigos, que



estuvieron presentes durante la fiscalización, mostraron el Registro de Faena en plataforma digital a través de la plataforma Teams”, de modo que, considera, la sentencia infringe los principios de la lógica de derivación y razón suficiente. Complementa este aserto indicando que “la declaración de los dos testigos contestes, debieron bastar para desvirtuar la presunción simplemente legal contenida en el informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo y para acreditar el error de hecho contenido en la Multa.”.

Considera que el vicio invocado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues, de haber la sentenciado analizado la prueba conforme a las normas sobre apreciación de la prueba, y las reglas de la sana crítica, habría “tenido por asentado que mi representada sí contaba con el registro de faena al momento de la fiscalización, por lo que la Multa contenía un error de hecho”, y que ello habría conducido a acoger el reclamo.

Como petición concreta de esta causal, consigna que “al incurrir la sentencia en la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, hace que la misma deba ser anulada por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, por cuanto los vicios expuestos han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, debiendo dictar la correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley, es decir, acogiendo el reclamo judicial de multa interpuesto por esta parte y dejando sin efecto la Multa Nro. 7921/23/28-2”

Cuarto: Que el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, todo lo cual evidencia su carácter extraordinario que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca, como, asimismo, de las peticiones que efectúa.



Igualmente, cabe tener presente que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio, y, asimismo, a esta Corte le está vedado efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste, el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, salvo en el contexto de la causal expresamente prevista en la ley para la revisión del razonamiento judicial.

El recurso de nulidad, finalmente requiere claridad y precisión en su fundamentación lo que resulta necesario toda vez que aquello da y define la competencia del Tribunal superior, el que no puede acogerlo por otros motivos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo.

Quinto: Que, en consecuencia, el recurso de nulidad es un arbitrio de carácter extraordinario y de derecho estricto y sólo procede por las causales que expresamente se prevé en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo.

Sexto: Que, sobre la causal principal, resulta necesario tener en cuenta que la hipótesis que autoriza la nulidad por haber infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales cabe tener en consideración, en primer término, que la Constitución Política de la República, en su artículo 19 numeral 3°, reconoce a todas las personas la garantía del debido proceso, sobre cuyo contenido se ha señalado que comprende el derecho a que las decisiones de los órganos que ejerzan jurisdicción se funden en un proceso previo y legalmente tramitado, cumpliendo ciertos estándares mínimos que aseguren que la discusión y que la resolución de las pretensiones involucradas se lleve a cabo conforme a lineamientos de razonabilidad y justicia.

Así, la legitimidad de la decisión jurisdiccional está supeditada a la existencia de un órgano imparcial, dotado por la ley de la prerrogativa de conocer y juzgar de una causa y a la circunstancia de que tal decisión sea



el resultado de un proceso previo, revestido de reglas formales que aseguren un procedimiento racional y justo, aspectos todos que han sido expresamente regulados por la ley mediante la previsión de trámites considerados obligatorios que garanticen el derecho a ser oído, la instauración de etapas de discusión y prueba y de cargas referidas a la forma de las sentencias, destinadas a velar por la integridad de la decisión, su fundamentación y la oportunidad de su emisión.

En la materia que nos ocupa, los vicios que se alegan guardan relación con la imputación que se hace al tribunal de alterar el orden de la rendición de la prueba, sin resolución alguna; la decisión de excluir prueba pertinente, sin causal ni fundamento y la consideración como extemporáneo de un recurso de reposición interpuesto contra la decisión de excluir parte de su prueba, aspectos todos que requieren, para su admisión, de un mínimo de actividad probatoria, desde que los supuestos de hecho que alega deben ser acreditados para la declaración de la ocurrencia de los vicios que alega, al amparo de lo que prescribe el artículo 481 del Código del Trabajo.

Al respecto, la parte interesada nada ofreció al deducir su impugnación, y este déficit no se subsana con la transcripción de los fragmentos de la audiencia en el recurso, desde que para la procedencia de la causal se requiere contar con elementos indubitados de su ocurrencia, indispensables también para despejar la satisfacción de las cargas de preparación del recurso que supone uno como el deducido, razonamientos todos que imponen la desestimación del capítulo que se revisa, por los defectos formales aludidos en su formulación.

Séptimo: Que, a su turno, la primera causal opuesta, es decir, por infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia.

En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados, resultando procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención



formal de la ley -aquéllos en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado-, siempre que cualquiera de estas hipótesis que se presente influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Octavo: Que la exigencia antes referida, esto es, que los errores de derecho que se denuncian tengan influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, se traduce en demostrar que el vicio que se invoca ha tenido un efecto trascendente y concreto, de suerte que su verificación implique una real variación respecto de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se resolvió en la resolución impugnada, requerimiento que no es superfluo, porque no resulta posible admitir la declaración de una nulidad que no ha de repercutir sobre la sentencia atacada, porque tal situación, además de carecer de todo interés jurídico, atenta contra la economía procesal y como pronunciamiento abstracto es ajeno a la función jurisdiccional de este tribunal.

Noveno: Que en la especie, los errores de derecho denunciados en el primer capítulo subsidiario que se revisa carecen del efecto que exige la norma para admitir la procedencia de la causal alegada, desde que el tribunal desestima el reclamo no sólo por las consideraciones que impugna en el recurso, concernientes al procedimiento y fundamentos empleados por la recurrente, sino por razones de fondo contenidas en su considerando Sexto, que consigna que *“a mayor abundamiento, ha quedado plenamente establecido que la parte reclamante no ha logrado desvirtuar la presunción legal de veracidad que tienen los hechos constatados por el fiscalizador en el proceso fiscalizador”*, pasando a analizar la prueba rendida que le permite formular esa declaración, agregando en su segundo párrafo que nada se denunció sobre *“la existencia de una plataforma digital para llevar y/o centralizar la documentación referida a las empresas contratistas que mantiene vinculación la empresa que fue objeto del proceso fiscalizador”*, lo que le



permite descartar la ocurrencia de un error de hecho en el referido procedimiento.

Estas constataciones imponen el rechazo de este apartado de la impugnación, atendido que la eventual declaración de la efectividad de los errores de derecho postulados no imponen una decisión diversa de aquella adoptada en la materia, esto es, el rechazo de la reclamación intentada, al subsistir las razones de fondo que determinaron también aquella decisión, por parte del tribunal.

Décimo: Que, sobre la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, invocada por la parte demandada, cabe tener en cuenta que el artículo 456 del Código del Trabajo establece que: *“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”*

Por ello, lo que corresponde es determinar si en su sentencia el tribunal ha vulnerado en forma manifiesta, esto es, de manera evidente y notoria las reglas indicadas en el artículo 456 ya citado.

Undécimo: Que, de acuerdo a lo expresado, nuestro sistema procesal ha entregado parámetros a los jueces del fondo para la valoración de la prueba rendida en la materia, imponiéndoles la obligación de respetar la coherencia y la razonabilidad que debe conducir tal proceso para resolver en un determinado sentido, los que Couture define como “las reglas del correcto entendimiento humano”.

En consecuencia, en el examen de fundamentación de las sentencias se exige que los tribunales asienten los hechos que sostienen lo decidido y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, porque su motivación legitima la función jurisdiccional y da cabida



a la interposición de los recursos legales para activar los mecanismos de control en la aplicación del derecho al caso concreto, de manera que la función del tribunal *ad quem* al conocer del recurso de nulidad por esta causal radica en la revisión del razonamiento que ha seguido el tribunal en el citado proceso.

Duodécimo: Que, para que esta Corte, en cuanto tribunal de nulidad, se encuentre en condiciones de efectuar un control sobre las reglas de la valoración de la prueba en la fundamentación de la sentencia, resulta indispensable que la parte recurrente precise al momento de formalizarlo, las reglas fundamentales de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que habrían sido incumplidas por el juez de la instancia, límites de ponderación que tradicionalmente se han entendido referidos a las leyes fundamentales de coherencia y derivación y a los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

En la especie, el recurso señala que la ponderación de la prueba que indica infringe los principios lógicos de identidad y de razón suficiente, postulando que el tribunal estableció por una parte la existencia del registro reclamado y, a continuación, la ausencia de error de hecho al respecto; y que el examen correcto de los antecedentes enunciados debieron bastar para desvirtuar la presunción simplemente legal contenida en el informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo y para acreditar el error de hecho alegado, exposición de motivos que – en cuanto a la primera afirmación – la simple lectura del fallo descarta, en tanto que la segunda no guarda relación con la causal que se invoca, sino únicamente con la disconformidad de la parte con lo decidido, lo que resulta ajeno a la naturaleza y fines del recurso intentado y es propio de las impugnaciones que constituyen instancia, cuyo no es el caso.

Décimo tercero: Que, por todo lo expresado, la impugnación será íntegramente desestimadas.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 456, 477, 478 letra b), 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** sin costas el recurso de nulidad deducido por la parte reclamante, en contra de la sentencia de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BMSXXSFTWXR

ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT I-194-2023, la que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Parra.

No firma la ministra señora Sabaj, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse suspendida de sus funciones.

N° Laboral-Cobranza-3367-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BMSXXSFTWXR

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Graciela Gomez Q. y Abogado Integrante Waldo Leonidas Parra P. Santiago, diez de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diez de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BMSXXSFTWXR